

EL OCCIDENTE.

DIARIO POLITICO.

EN MADRID.

Sábado 10 de Abril de 1858

EN PROVINCIAS.

EDICION DE LA MAÑANA.

AÑO IV.—NUM. 1015

Precios de suscripción. Doble de antes, llevado a domicilio. Por los meses de suscripción. En la Administración, calle del Carmen, núm. 60, y en las librerías de Cuesta, calle Mayor, núm. 2. Bailly-Baillière, calle del Príncipe; Oliveros, calle de la Concepción; Durán, calle de la Victoria, y López, calle del Carmen.

Precios de suscripción. 16 rs. por un mes; 44 por trimestre, haciendo la suscripción por medio de comisionados; y 40 remitiendo libranza o sellos de franqueo. Por los meses de suscripción. En la Administración, calle del Carmen, núm. 60, y en las librerías de Cuesta, calle Mayor, núm. 2. Bailly-Baillière, calle del Príncipe; Oliveros, calle de la Concepción; Durán, calle de la Victoria, y López, calle del Carmen.

MADRID 10 DE ABRIL.

La cuestión de si debe establecerse una legislación especial para la imprenta, o debe esta someterse a la jurisdicción ordinaria y al código penal, está dando lugar a importantes discusiones en la prensa. La *Epoca*, *El Estado*, *El Clamor Público*, *El Diario Español*, y no recordamos si algún otro periódico, son los que hasta ahora se han ocupado o se ocupan de esto asunto, en cuya iniciativa cabe una parte de gloria a *El Occidente*, que ha sido el primero en manifestar con franqueza su opinión contraria a la legislación especial.

La *Epoca* ha sido quien con mas calor ha salido a combatir esta teoría, y quien ha presentado argumentos de mas importancia en defensa de la legislación especial. Harémosle, pues, cargo principalmente de sus observaciones, con lo cual habremos tambien contestado a las que han espuesto los demás colegas que siguen su parecer. Ante todo haremos notar, que los partidarios de la legislación especial en materias de imprenta prescinden casi por completo de los gravísimos inconvenientes, de los perjuicios y quebrantos que trae consigo este sistema, para fijarse únicamente en los que puede ocasionar el que nosotros proponemos. Olvidan que el primero deja a la prensa a merced del poder, autoriza las arbitrariedades del gobierno y de sus delegados, pone en manos de estos el derecho de impedir caprichosamente la publicación de las ideas garantida por la Constitución, y hace posible, en una palabra, la anulación de la prensa sin responsabilidad ni cortapisa alguna por parte del poder; ¿qué decimos el poder? un funcionario subalterno, un censor, o fiscal, o llámese como quiera, tiene a su disposición los medios de hacer ilusorio uno de los mas altos derechos que la ley fundamental concede a todos los españoles. Todas las disposiciones que han venido rigiendo hasta hoy a la prensa, lo mismo las que han sido dictadas por un sentimiento de odio hacia la institución, que las que han estado basadas en un sentimiento de expansión, de tolerancia y de libertad, todas han dado idénticos resultados. Manda el partido moderado, y sufre persecuciones la prensa progresista; sube el partido progresista al poder, y sufre iguales o mayores quebrantos la prensa conservadora. Siempre el partido o la fracción que tiene el mando persigue, oprime y ahoga la voz de los periódicos de la oposición. ¿No dice esto nada a los partidarios de la legislación especial? ¿Y no se evitan estos funestos resultados, y no se pondría coto a la arbitrariedad ministerial, y no se emanciparía al pensamiento de la vergonzosa tutela en que se encuentra, adoptando el sistema que nosotros proponemos? ¿De qué manera será mas independiente, mas considerada, mas digna la prensa periódica? ¿De qué manera corresponderá mejor a su elevada misión: dejando al arbitrio del gobierno la interpretación de una ley que vé delitos en todas partes, que por la cosa mas insignificante pone el veto a la circulación de los impresos, que penetra en el sagrado recinto de la conciencia del escritor para castigar sus intenciones; o encomendando a la rectitud e independencia de la magistratura inamovible el conocimiento de las trasgresiones de las leyes comunes que pueden cometerse por medio de la prensa? ¿De qué lado están las garantías de la justicia y de la equidad? ¿del lado de un ministerio, influido generalmente de los móviles y de las pasiones del momento, o del lado de una clase revestida del sagrado carácter que tiene la magistratura, y colocada por encima del mezquino nivel de los intereses políticos? Si no militara otra razón que esta para desear la reforma que proponemos en la legislación de imprenta, bastaría ella sola para hacerla aceptable.

Por mas que se esfuerce *La Epoca*, a no conseguirá persuadirnos de esa especialidad, que según ella, revisten los delitos cometidos por el intermedio de la prensa. El error consiste en dar el nombre de delitos a lo que no lo es ni puede serlo, en querer hacer penable lo que no está sujeto a penalidad, porque no constituye delito. La prensa solo delinque en alguno de estos casos: Cuando ataca a la religión del Estado, cuando ataca a la monarquía o a las instituciones, cuando ofende a la moral, cuando injuria, cuando calumnia y cuando escita directamente a la sedición. Fuera de estos casos, no hay delitos de imprenta, a menos que no se busquen en la intención del escritor o en interpretaciones violentas de las palabras.

Ahora bien: todos esos delitos tienen asignada su correspondiente penalidad en el Código, por que son verdaderos actos punibles; todos ellos, con una sola excepción, de que hablaremos después, pueden hoy mismo ser juzgados y castigados por los tribunales ordinarios. ¿Por qué, pues, no han de ser sometidos a estos? La *Epoca* alega, como argumento de gran fuerza, para probar que existe esa especialidad de delitos de imprenta, un ejemplo tomado del artículo 174 del código penal, que es el que se refiere al delito de sedición. Consiste este en actos materiales e inequívocos, dice nuestro colega; y no pudiendo cometerse tal delito por medio de la imprenta, puesto que con ella solo puede es-

citarse a la sedición, lo cual es muy diverso, no halla *La Epoca* una fórmula para que los tribunales ordinarios conozcan del delito de escitar a la sedición por medio de los impresos. Esta es la excepción de que hablábamos mas arriba; pero no puede ser un obstáculo para que deje de aceptarse el principio general de la sumisión de la imprenta al código común. Cuando se trató de este asunto por primera vez en la comisión del Congreso encargada de dar dictamen sobre el proyecto de ley del señor Díaz, manifestamos que nuestra doctrina partía de la base de la reforma del código penal en aquellos puntos que fuere necesaria, para evitar la impunidad o la severidad desproporcionada a los delitos de imprenta. Esta misma idea ha sido espuesta tambien en las columnas de *El Occidente*, y ahora debemos insistir en ella a propósito del caso citado por *La Epoca*. No vemos, pues, inconveniente en que se adicione al código penal el delito de escitar a la sedición, único de este género que puede cometer la imprenta; pero queremos que se consigne de una manera clara, esplicita y terminante, no con las ambigüedades de que nos ofrece tan lastimosa prueba el proyecto de ley que hoy rige a la prensa, copiado en esta parte por el proyecto presentado últimamente a las Cortes. Digase que se comete el delito de escitar a la sedición, cuando se escita a la sedición, impulsando a las masas con palabras verdaderamente sediciosas, haciendo llamamientos a las armas, etc., etc.; y de esta manera no habrá dudas ni escrúpulos en los magistrados para imponer el condigno castigo al delincuente.

Pero dice *La Epoca* que lo que escita a la sedición en unas circunstancias, no produce el mismo efecto en otras: esta es una sutileza que no admitimos. Lo que puede escitar a la sedición en un caso, podrá escitar a ella en todos, o no será verdaderamente sedición. Ya que *La Epoca* es aficionada a citar ejemplos, seguiremos el suyo: Un grito subversivo lanzado en un momento de efervescencia popular, promueve una sedición; pero ese mismo grito altamente subversivo, arrojado en otras circunstancias, solo provoca la risa o la indignación del público. Aquí tenemos un delito común que se castiga por el código, y que tiene una gran analogía con el de escitar a la sedición por medio de la imprenta: tenemos un acto material, exterior, que en unas circunstancias puede producir el delito de sedición, y en otras no. El juez castiga, en unas y otras circunstancias, este acto, idéntico al que puede cometerse por la vía de la imprenta; ¿por qué, pues, dice *La Epoca* que ese mismo juez no puede castigar en todas circunstancias el mismo delito cometido por la última? Pero todavía vamos a ponérselo tan claro a nuestro colega, que no podrá replicarnos en este particular.

¿Qué diferencia halla *La Epoca* entre una escitación a la sedición hecha por un individuo en medio de una plaza pública, y la que se hace por medio de un impreso? Esencialmente ninguna. El impreso sedicioso, si lo es verdaderamente, producirá el mismo efecto que si el autor del escrito le declamara en la vía pública. Ahora bien: si el tribunal castiga al individuo en este último caso, ¿no podrá del mismo modo castigarle cuando dice al público por escrito lo que podría decirle de palabra? Esto no admite duda. Veá *La Epoca* cómo no se pueden llevar tan al extremo sus deducciones, y cómo hay alguna regla de criterio a que puedan ajustarse los tribunales en delitos de la clase del que hemos hablado.

Hemos contestado a lo mas principal del artículo de *La Epoca*. Como no será esta la última vez que tengamos que ocuparnos de esta cuestión, y atendiendo a las dimensiones de este artículo, dejemos para otro día el hacernos cargo de otras objeciones que se ofrecen al sistema, defendido por nosotros, de someter los delitos de imprenta a la jurisdicción ordinaria; sistema que tiene muchos partidarios y que va ganando gran terreno entre los hombres pensadores; sistema que es el mas practicable de todos y que está en consonancia con las leyes de la equidad y de la justicia.

C. del Mazo.

En la sesión que tuvo ayer lugar en el Senado, esplanó el señor marqués de Molins la ya anunciada interpelación sobre la erección de monumentos en honor de los hombres públicos. Con este motivo, las tribunas se hallaban al abrirse la sesión cujadas de gente, así como los bancos de los señores senadores.

Abierta a las dos en punto de la tarde, bajo la presidencia del señor marqués de Viluma, se dió lectura al dictamen del ferro carril de Palencia a la Coruña, y el relativo a la reforma de la ley de minas.

A continuación obtuvo la palabra el señor Tejada para apoyar la proposición referente a la publicación del *Diario de las sesiones*, de la cual tienen noticia ya nuestros lectores.

Como era de esperar, el Senado, teniendo presente lo que en 1849 acordó sobre este mismo asunto, y las observaciones del gobierno, espuestas por boca del señor ministro de Gracia y Justicia, desechó la proposición del señor Tejada por 75 votos contra 6.

Esta proposición atacaba, en concepto del señor Fernandez de la Hoz, visiblemente la Constitución del Estado, en la cual se previene que los reglamentos de los cuerpos colegisladores han de ser objeto de una ley. Nosotros preveíamos este resultado; no era posible esperar otro después de haber examinado tal proyecto, dirigido a sujetar la discusión de las Cámaras a la voluntad de un secretario, y a privar al público de los discursos de nuestros legisladores.

En otra ocasión lo hemos dicho y no vacilamos en repetirlo: preferimos la franqueza del señor Canga Argüelles, si quiera profese ideas inaceptables, a la hipocresía política de los autores de esta proposición, que llamándose liberales, no vacilan en sacrificar todas las conquistas del liberalismo.

Terminado este incidente, el señor marqués de Molins se levantó para esplanar su interpelación pidiendo que se presentase cuanto antes la ley de empleados, que no se prorogue el plazo para la libre importación de cereales, y que no se permita la erección en Madrid de monumentos en honor de hombres públicos hasta que lo autorice una ley.

Su señoría, sin embargo de abrazar tres importantes puntos su interpelación, ocupó casi todo su discurso con el relativo a la erección de la estatua de Mendizábal, demostrando su vasta erudición, y dando a cada momento pruebas de su elocuencia.

El señor Roca de Togores se opuso fuertemente a esta clase de honores tributados a hombres políticos cuyas cenizas todavía están calientes, y que, como el señor Mendizábal, son mas que la admiración del pais, la admiración de un partido.

Al ocuparse del lugar donde el gobierno ha concedido el permiso para la erección de este monumento, trajo a la memoria de los señores senadores la historia de aquel sitio donde vivió Cosme de Médici, Hernán Cortés y Tirso de Molina, varones esclarecidos que honran a España y cuya memoria debiera con mas razón perpetuarse en mármoles y en bronce. Nosotros, que no hemos sabido elevar un monumento a esos ilustres varones, y que destruimos los edificios que nos recordaban el progreso de nuestras armas y de nuestras letras, que es el de nuestras glorias, denominando al lugar de nuestra destrucción *Plaza del Progreso*; nosotros, que jamás hemos procurado pagar un tributo con esta clase de monumentos a nuestra grandeza, vamos hoy a cometer el anacronismo de levantar en medio de la capital de la monarquía uno dedicado al hombre de partido, muerto ayer, cuando aun yacen en el olvido aquellos personajes ilustres.

S. S. terminó su discurso diciendo que en todos los países estas manifestaciones eran objeto de una ley, y que mientras esta ley no se promulgase se opondría al proyecto mencionado.

El señor presidente del Consejo de ministros manifestó que en efecto habia autorizado la erección de la estatua del señor Mendizábal por sí propio, creyendo que el asunto estaba muy lejos de tener la importancia que tan inesperadamente se le ha dado después, y llamó sobre sí toda la responsabilidad que sobre la concesión pudiera caberle. El señor ministro de Gracia y Justicia dió tambien esplicaciones, reclamando para todo el ministerio la responsabilidad de que quería descargarle su presidente, concluyendo con asegurar como ya este habia indicado que la ley sobre honores públicos se presentaría inmediatamente y con arreglo a ella se procedería, lo mismo respecto a la estatua del señor Mendizábal que a los demás monumentos de la misma especie.

Los señores ministros de la Gobernación y Fomento cerraron el debate, contestando respectivamente cada uno de los puntos a que el señor marqués de Molins se habia referido en su interpelación.

El señor Díaz sostuvo que las variaciones hechas durante su ministerio en el ramo de empleados habian sido necesarias, añadiendo que solamente habia separado a cuatro gobernadores, y que la ley de empleados se presentaría a la mayor brevedad.

Por último, el señor ministro de Fomento declaró que acerca de la cuestión de libre introducción de cereales, no se alterarían los plazos marcados en las órdenes que rigen hoy en la materia.

Terminado este incidente se levantó la sesión, a las tres y media.

La sesión verificada ayer en el Congreso, fué de corta duración y de escasa importancia. Abierta a las dos y veinte minutos de la tarde, y después de leída y aprobada el acta de la anterior, el señor Balmaseda usó de la palabra para pedir a la comisión que entendiende en el examen de los presupuestos generales del Estado, que presente a la mayor brevedad posible su dictamen para que aquellos puedan discutirse ampliamente antes de que termine la legislatura.

El señor Ribó, uno de los individuos de dicha comisión, contestó que esta llevaba muy adelantados sus trabajos, especialmente en el examen

de los relativos a Gobernación, Fomento y Guerra, con lo cual se dió por satisfecho el señor Balmaseda.

Otra escitación análoga dirigió el señor Campomamor, fundada en idénticas razones, a la comisión de imprenta; a la que contestó el señor Góicorrotea asegurando que la comisión hacia cuanto la era posible porque aquella ley quedara discutida en la presente legislatura.

Dada cuenta de los nombramientos hechos por las secciones en el día de ayer y de los asuntos de que se ocuparon, se leyeron varias proposiciones de ley, de las cuales fueron tomadas en consideración algunas, y desechadas otras.

La primera de aquellas, en la que se pedia una pensión de veinte mil reales para la familia del teniente general Ceballos Escalera, fué apoyada breve y elocuentemente por su autor el general Ortega, haciendo presentes al Congreso los servicios que aquel insigne patriota habia prestado a la nación. La cámara, apreciando en todo su valor las razones del orador, se sirvió tomarla en consideración.

La segunda proposición de ley, presentada y defendida con corrección y facilidad por el señor marqués de San Carlos, iba encaminada a señalar las circunstancias que deben concurrir en las personas agraciadas con títulos de Castilla y de grandeza de España. Si no estamos equivocados, la proposición por S. S. presentada exigía en los agraciados, ademas de los servicios que para adquirir tan honrosas distinciones debían haberse prestado, la cantidad de doscientos mil reales y la circunstancia de ser título de Castilla en los segundos, y la cantidad de cien mil reales en los primeros.

Los esfuerzos que el señor marqués de San Carlos hizo para que su proyecto se aprobase no fueron bastantes a conseguirlo. El Congreso desechó en votación nominal por 50 votos contra 25 la proposición defendida por S. S.

El señor Mazo pidió la palabra para rebatir el proyecto, pero el señor presidente no se la concedió porque no lo consentía el reglamento. Si hubiera hablado, habria dicho positivamente lo que a primera vista se ourre después de leído el proyecto; a saber, que se opone a la régia prerrogativa, porque prescribe reglas sobre un asunto en el que el monarca debe ser libre absolutamente. El rey, atento solo al bien de su pais, y dispuesto siempre a premiar los servicios que a este se prestan, se veria imposibilitado de hacerlo en muchas ocasiones, por carecer las personas por él señaladas para esta gracia, de esas rentas que el señor marqués de San Carlos señalaba en su proposición como necesarias. Nosotros podríamos citar a S. S. muchas eminencias que han hecho grandes servicios a las instituciones, que por no tener crecidas rentas se verian privadas de merecer una honra a la que son acreedores.

Después de otras dos proposiciones de ley para señalar pensiones, desechada la una, y tomada en consideración la otra por la Cámara, el señor Polo hizo uso de la palabra para apoyar la suya, presentada hace algunos dias, y relativa a la reforma de la vigente ley de diputaciones provinciales.

El señor Polo reconoció que la ley de 1847, hecha y promulgada con objeto de poner coto a la anarquía que reinaba en las provincias, producida por las leyes progresistas, debía modificarse en la actualidad, concediendo a aquellos cuerpos mas libertad de acción que la que hoy se les concede.

Para S. S. estas leyes son de suma importancia, porque contribuyen a formar la verdadera opinion política de las provincias.

El Congreso, no apreciando bastante estas razones, desechó la reforma del señor Polo en votación nominal, por 40 votos contra 25.

Terminado este incidente, y después de aprobarse sin discusión algunos dictámenes de la comisión de actas, se levantó la sesión para reunirse el Congreso en sesión secreta y tratar algunos asuntos de régimen interior.

Eran las cuatro.

La comisión de imprenta se reunió ayer bajo la presidencia del señor Gonzalez Brabo, y adelantó algo en sus trabajos discutiendo los títulos 4.º y 5.º del proyecto del gobierno, en los cuales se han introducido varias modificaciones.

El señor Gonzalez Brabo, con la lucidez propia de su brillante talento, espuso diversas consideraciones generales, que robustecen la creencia que abrigamos de que, después de los muchos ensayos hechos, solo en los tribunales ordinarios, modificando previamente en algunos puntos nuestra legislación penal, puede encontrarse la solución de justicia a la cuestión de imprenta. Mas, como el señor Gonzalez Brabo considerase que la iniciativa en este asunto debe ser de la competencia del gobierno, acepta la ley especial presentada por este, sin desconocer los inconvenientes de que adolece y las dificultades que ocasiona, y tratando de sacar de ella todo el partido posible en favor de la imprenta, como ha demostrado en la discusión de ayer tarde.

El señor Estrella, el señor Esteban Collantes, el señor Borrego y otros señores diputados contribuyeron tambien en gran manera al esclarecimiento de las cuestiones que ayer se trataron y a la adopción de las modificaciones introducidas en la parte del proyecto de que al principio hemos hecho mención, esponiendo razones muy acertadas.

El señor Gutierrez de la Vega defendió asimismo, con facilidad y oportunos razonamientos, la idea de someter los delitos de imprenta a la jurisdicción ordinaria y a la penalidad del Código, idea que va ganando terreno cada dia, así en el ánimo de los señores diputados, como en la conciencia de la generalidad de las personas que se ocupan de los asuntos políticos.

Al llegar al título que trata de los tribunales competentes para conocer de los delitos de imprenta, presentó el señor Borrego un proyecto de enmienda u observación, que se reduce a la creación de un cuerpo de jueces ambulantes inamovibles, nombrados a propuesta del tribunal supremo, los cuales, componiendo diversos tribunales (a la inglesa) que residirían en ocho o diez distritos, deberían trasladarse a las capitales donde fuese necesaria su presencia para juzgar algún escrito.

Semejante proyecto fué acertadamente combatido, primero por el señor Gonzalez Brabo, y de una manera terminante después por el señor Mazo, quien manifestó que su pensamiento era el de que los tribunales ordinarios conocieran de todos los delitos cometidos por medio de la imprenta, pero que rechazaba el absurdo de la creación de una carrera especial para conocer de dichos delitos. En concepto del señor Mazo, la inamovilidad propuesta por el señor Borrego respecto de los jueces que hubieran de componer su exótico tribunal, seria hasta un motivo de escándalo, cuando desgraciadamente no gozan de este privilegio los de los tribunales ordinarios, que fallan en asuntos de mucha mayor gravedad e importancia que las que pueden tener los de imprenta.

El señor Mazo combatió, bajo otros diversos puntos de vista, el proyecto del señor Borrego, haciendo palpables los enormes gastos que acarrearía al erario público un tribunal que habria de estar en continuo movimiento y consumir sumas considerables en sus viajes y expediciones, sin que su creación trajese ventaja alguna sobre los tribunales ordinarios, antes bien, muchos y muy graves inconvenientes.

En igual sentido y con mucha lucidez, como quien posee estensos conocimientos en la materia, se espresó el señor Posada Herrera.

Tambien habló oportunamente el señor Narcarino Bravo, demostrando con pruebas irrecusables que el tribunal de jueces de derecho habia absuelto mas periódicos y producido resultados mas ventajosos para la prensa que todos los jurados.

Hoy proseguirá la comisión sus trabajos.

Escrito nuestro artículo de fondo, llega a nuestras manos *La Epoca*, que se ocupa en impugnar el que escribimos hace dos dias sobre la cuestión de imprenta. A pesar de que el artículo de *La Epoca* puede darse en su parte mas esencial por contestado en el que mas arriba publicamos, ofrecemos hacernos cargo próximamente de sus observaciones. Por hoy solo diremos a nuestro colega que deberá haber reformado su juicio en cuanto a la monstruosidad y estravagancia que creía hallar en el sistema que defendemos, al ver que nuestra doctrina vá adquiriendo muchos prosélitos dentro y fuera del Congreso.

El Diario Español copia el párrafo, en que nos hacemos cargo de un artículo de nuestro colega sobre los rumores de crisis, y dice:

Con la franqueza que nos caracteriza y sin renegar del apoyo que hemos prestado a los personajes políticos a que se refiere *El Occidente*, manifestaremos a nuestro colega, que ahora, como siempre, colocamos la cuestión de personas por bajo de la de los principios, y que si se tratase de hombres públicos, reputáramos como los mejores para desempeñar la gestión gubernamental a aquellos cuya adhesión al trono y a las instituciones constitucionales, estuviese sólidamente acreditada, que tuvieran energía para hacer el bien e imponer respeto a las pasiones ilegítimas y que llevarán a la esfera del poder supremo un pensamiento concreto, definido y fecundo en consecuencia para el auge de las doctrinas liberales y conservadoras.

Por lo demás, recordando los rasgos mas sobresalientes en la historia de nuestro colega, y teniendo en cuenta que ha combatido a todos los gabinetes que han existido desde su aparición en la arena periodística, desearíamos que nos indicase cuáles eran los hombres públicos que en su concepto deberían regir el timón del Estado en las actuales circunstancias, porque tales cualidades podían tener y sintetizar en tales términos las condiciones que hemos indicado, que no seria difícil que nos pasieran al lado de *El Occidente*, fides a nuestra norma de conducta, de preferir siempre las ideas a las entidades personales.

Aceptamos las esplicaciones de nuestro colega por lo que respecta a la preferencia que dice dar a la cuestión de principios sobre las de personas. En cuanto a su deseo de que le indiquemos cuáles son los hombres públicos que, en concepto

nuestro, pueden regir el timón del Estado, solo tenemos que decir a *El Diario* lo que ya en otra ocasión hemos manifestado espontáneamente, a saber: que no tenemos candidatos para el ministerio, porque consideramos muy poca cosa a las personas con relación a las ideas. Démos *El Diario* un gabinete cuyos individuos, dentro de los principios del partido moderado, sean sinceramente adictos a las instituciones constitucionales, enérgicos para hacer el bien, y que lleven a la esfera del poder supremo un pensamiento concreto, definido y fecundo en consecuencias para el auge de las doctrinas liberales y conservadoras, y no le escatimaremos nuestro apoyo, cualesquiera que sean los nombres de las personas que le constituyan.

Nuestro apreciable colega *La Regeneración*, convencido, sin duda, de la verdad y justicia de nuestras observaciones, ha renunciado a contestarnos.

Ya que tan dócil se muestra en esta ocasión a los razonamientos de los liberales, como él dice, desearíamos que fuera justo, y además de justo galante, manifestando que ha reconocido nuestras razones, y que en adelante se unirá a nosotros para pedir la estricta observancia del Concordato en el verdadero sentido en que nosotros la hemos pedido.

Leemos en *El Clamor*:

«Patece que entre los que mas se han esforzado durante estos últimos días en oponer dificultades a la erección de la estatua de Mendizábal, se cuenta un personaje que, por su calidad de extranjero, y sobre todo por el carácter de que se halla revestido, debería abstenerse de tomar parte en tales cuestiones y de mezclarse en nuestros asuntos.»

Aunque no seamos partidarios del pensamiento de levantar estatuas a los contemporáneos, no podemos menos de revelarnos contra la intervención de toda influencia extranjera en nuestros asuntos, siquiera esta intervención se ejerza en pro de las ideas que sustentamos. No harían pocos los personajes extranjeros con gobernar y arreglar su propia casa, sin meterse a prodigar a sus vecinos consejos oficiosos, y que pueden parecer interesados, sobre todo cuando no se piden ni se necesitan. Bueno estaría que, siguiendo de este sistema, se creyese autorizado el señor Pidal, v. gr., para aconsejar al santo Padre a sus ministros que varían de cocinero, o reformasen el empedrado de la vía Appia. Cada cual métase en sus negocios personales, y deje a los otros que arreglen o desarreglen los suyos como mejor les parezca.

La Monarquía dice que el viaje del Príncipe Galitzin, embajador de Rusia, por las provincias de España, tiene por objeto conocer a fondo el estado político de nuestro país e informar de él a su gobierno.

Santa Ana ha dejado a Cartagena de Indias con dirección a la Habana, donde ha debido llegar a fines de marzo. No sería imposible que de allí pasase a Méjico, devorado por las mas espantosas guerras civiles. Santa Ana cuenta con la protección del clero mejicano, y creemos que también con otras protecciones en Europa.

En virtud del dictamen aprobado anteaño por el Congreso, los señores Ordóñez, Alonso Martínez y Manresa, únicos ex-ministros que habían quedado sin cesantía por la ley de las Cortes constituyentes, dando a ésta un efecto retroactivo, entrarán en el goce de ella, y los que disfrutaban 40,000 reales antes de la promulgación de dicha ley por sus muchos años de servicio, recibirán este sueldo. Desde el día de la promulgación de la ley votada por las Cortes constituyentes, las cesantías de los ministros quedan sujetas a lo que en ella se proponía.

La comisión general de presupuestos se reunirá en los primeros días de la semana próxima para dedicarse asiduamente a discutir los dictámenes de las secciones. El de la Gobernación se encuentra ya terminado.

Nos apresuramos a comunicar a nuestros lectores que según noticias que nos merecen entero crédito, el servicio de transporte de mercancías en el ferrocarril de Almansa a Alicante empezará el 26 del corriente.

Dice *La España*, a propósito de la cuestión suscitada por la estatua de Mendizábal, que se guarda una reserva desusada con respecto a los términos de avenencia entre los ministros. «Nosotros confesamos, francamente, añade, que no los conocemos.»

Remitidos ya por el ministerio de la Guerra los documentos que había pedido el señor Santa Cruz sobre las sustituciones y cantidades pagadas por los mozos que redimieron la suerte de soldados en las últimas quintas, entrará muy pronto el Congreso a tratar del proyecto de la de 23,000 hombres que ha pedido el gobierno de S. M.

El miércoles a las ocho de la noche, S. M. la Reina, recibió en audiencia particular a los ministros plenipotenciarios de Inglaterra y de Portugal, los cuales acompañados del introductor de embajadores tuvieron la honra de poner en las reales manos cartas de sus respectivas cortes, y la de presentar el de S. M. británica el honorable Plantiff, agregado a la legación y el muy honorable lord Strafford, par de Inglaterra. El representante de S. M. fidelísima a los cabaleros Mendez de Vasconcellos, nuevo agregado a la

legación, y Lumestre Saldanha que se despidió para París. En seguida los expresados representantes fueron recibidos igualmente por S. M. el Rey con la benevolencia que le es propia.

Anteaño se reunieron los diputados catalanes con el objeto de tratar de la cuestión de arbitrios para carreteras, ligada a la de la amortización de la moneda de calderilla. Deseando el señor ministro de Hacienda resolver este asunto con la ilustración debida, nombró una comisión de altos empleados para que la examinaran en unión con algunos diputados catalanes elegidos por sus compañeros. Esta comisión ha debido reunirse ya algunas veces, y ayer era el día señalado para dar cuenta de sus trabajos al indicado señor ministro.

La controversia suscitada entre el órgano de la democracia y *La Iberia* sobre los principios políticos que ambos diarios sostienen, dió motivo a que se dudara de la adhesión de algunos individuos de aquel partido a las doctrinas sostenidas por su representante en la prensa. Para deshacer este concepto han dirigido dos cartas al director de *La Discusión* los señores Figueras y Orsen, manifestando su conformidad con lo sustentado por este diario.

El gobierno, de acuerdo con el Consejo Real, ha concedido 5,000 presidiarios a la real compañía del canal de riego y navegación de Tamarite de Litera, para que pueda emplearlos en el arbolamiento de tierras y en los trabajos y obras de todas clases a que viene facultada por la ley de concesión, pudiendo disponer de este número de penados como primera entrega, sin perjuicio de los que posteriormente se le concedan, caso de consentirlo el número de presidiarios aplicables a esta clase de trabajos.

El Consejo Real, en su reunión del miércoles, discutió y aprobó la primera de las bases de la ley sobre empleados públicos.

Aunque el resultado obtenido ayer de los debates en el seno de la comisión de imprenta, hace esperar que se habrán desvanecido en gran parte los temores que manifiesta anoche *La Epoca*, creemos conveniente trasladar los siguientes párrafos en que dicho periódico se lamenta de la lentitud con que procede la comisión:

«No sabemos, dice, por qué desde el instante mismo en que vimos nombrada la comisión de imprenta y la marcha que seguía en sus trabajos, temimos que iba a pasar la presente legislatura sin que el proyecto de ley presentado por el gobierno de S. M., y que mejora notablemente la situación de la imprenta, fuese aprobado por el Congreso y el Senado. Los lectores de *La Epoca* recordarán que previnimos a los diputados, y muy especialmente a las dignas personas que componen la comisión de imprenta, contra los trabajos que solapadamente se hacían, no tanto para combatir de frente lo beneficioso para la prensa que había en el nuevo proyecto, cuanto para impedir que este llegase a ser ley del Estado.

Hoy *El Occidente*, *El Estado* y otros periódicos, parecen participar de nuestros temores y escitan viva y personalmente a los señores Gonzalez Brabo, Borrego, Estrella y Giron, que son o han sido escritores públicos, para que tomando en consideración los altos intereses que están comprometidos con no haber presentado su dictamen el primer día de sesión después de los ocho que ha habido de vacaciones, se apresuren a hacerlo, porque de otra suerte serán completamente inútiles todas sus tareas.

Nosotros tenemos entendido que hoy debe reunirse definitivamente la comisión de imprenta, después de dos días que no ha celebrado sesión. Veremos qué es lo que adelanta en esta conferencia, y se confirmará o no el triste presentimiento que abrigamos. Si fuese lo primero, desde luego aconsejaremos a todos los diputados celosos por el bien de la prensa, que se apresuren a presentar una proposición declarando ley la que pende hoy del fallo del Congreso.

Insistimos en que esta es la senda constitucional que puede seguirse en este asunto en caso de no discutirse y aprobarse en la presente legislatura la nueva ley de imprenta. ¿Qué es lo que las Cortes han formulado en la legislatura anterior? Un voto autorizando al gobierno para poner en planta el proyecto que había llevado a las Cortes. Este proyecto está anulado explícita y solemnemente desde el instante mismo en que se ha presentado otro por el gobierno de S. M. La autorización, por tanto, carece absolutamente de base, no existe, y o hay que volver a la legislación antigua con respecto a la prensa, o que establecer por autorización o discutiéndola la nueva ley pendiente en la actualidad del voto del Parlamento.

Piensen los escritores públicos, piensen los diputados amantes de la institución, piensen los individuos de la comisión de imprenta, que han sido electos todos como enteramente favorables al proyecto de ley presentado por el gobierno de S. M., cuál será la situación de los diarios políticos si tuvieran que atravesar todavía otro año con la legislación que hoy existe, y que mañana, en manos de un gobierno opresor, sería la mordaza mas completa que puede ponerse a la prensa. Acaso los que sueñan con ser poder dentro de breve tiempo, y serlo para llevar adelante proyectos reaccionarios y de grave trascendencia, quieran tener encadenada la prensa.

Nos dá motivo a pensar así la seguridad que tenemos de que en ciertas negociaciones celebradas en estos últimos días en la eventualidad de una crisis, la primera condición que ponían los hombres que esperaban ser llamados o los consejos de la corona, era mantener la legislación hoy vigente en materia de imprenta.

La cuestión es gravísima, y no nos cansaremos de escribir una y otra vez en la prensa, y si es necesario, por medio de nuestros amigos en el Parlamento, el sentimiento de deber y de patriotismo que no creemos pueda faltar a ninguno de los individuos de la comisión.

Hé aquí cómo dá cuenta la *Correspondencia autógrafa* de la reunión celebrada ayer por la comisión parlamentaria de ley de imprenta:

«Esta tarde ha celebrado una larga e interesante sesión la comisión que tienen a su cargo el proyecto de ley de

imprenta. Varios son los puntos importantes que en esta reunión se han ventilado, tratándose de la organización de tribunales para la imprenta, el señor Gonzalez Brabo y el señor Maza insistieron en la conveniencia de que se sujetase a la prensa a los tribunales ordinarios. El señor Borrego propuso la creación de tribunales especiales de jueces nombrados por el gobierno a propuesta del tribunal supremo de Justicia, los que serían inamovibles y fallarían las causas de la circunscripción de territorio que se les señalase. Estos tribunales, según la propuesta del señor Borrego, debían ser cinco. Varios individuos de la comisión hablaron en contra de la propuesta del señor Borrego, quien retiró esta ante la seguridad que se le dió de que en el preámbulo del dictamen se recomendaría la inamovilidad de los jueces que hubiesen de fallar los delitos de imprenta.

El señor Gonzalez Brabo presidente de la comisión pronunció un largo discurso después del cual se convino por todos en aceptar la idea del gobierno. El señor Estrella propuso en seguida que supuesto que se habían rebajado las cantidades que constituían los depósitos, se rebajase igualmente el maximum de las penas. Así lo acordó la comisión aunque dando distinta forma a la propuesta del señor Estrella. También convino la comisión en proponer la supresión de los dos artículos en que se preceptuaba formar un fondo especial con las multas impuestas a los periódicos y destinar estas multas a los establecimientos de beneficencia. La comisión creyó que se perjudicaba la riega prerogativa privando a S. M. de la facultad de perdonar las penas, lo que en último caso venia a hacer los delitos de imprenta de peor condición que los demás. La comisión ha aprobado esta tarde los cuatro primeros títulos. El punto de las recedidas es casi el único grave que aun le queda que discutir. Por esto se espera que acaso en esta misma semana termine sus trabajos. A la discusión de hoy han asistido casi todos los diputados periodistas y el diputado progresista señor Santa Cruz.

Copiamos de *La Epoca*:

«Estos días se dieron, según parece, pasos formales para la formación de un gabinete Narvaez, hasta el punto de investigar cuál sería la opinión de ciertos candidatos sobre la cuestión de imprenta, de los reglamentos y otras de actualidad. En la combinación dice, figuraban todos los colegas del duque de Valencia, incluso el señor Nocedal, y con la sola excepción de los señores Pidal y Seijas, que debían ser reemplazados por un diplomático muy conocido, y acaso por alguno de los actuales consejeros de la corona. Todos estos rumores se han desvanecido, sin embargo, de tres días a esta parte.

Tenemos motivos para creer que la dimisión hecha del cargo de diputado por el señor Trillo, ayudante de S. M. el rey y secretario del Congreso, si no formulada, estaba anunciada hace días, habiendo sido inútiles las gestiones hechas para que desistiese de su propósito.

Para la vacante de secretario que resulta en el Congreso, se presentan las candidaturas de los señores conde de San Juan, Aguirre de Tejada y Bouligny.

Los párrafos que damos a continuación están tomados de la *Correspondencia autógrafa*:

«El aumento de 50 millones votado por las Cortes en la contribución territorial, se cobrará en tres plazos o trimestres, dando principio el primero, el 5 de mayo próximo.

—Parece que el gobierno no ha recibido mas parte sobre carlistas, que uno de Lérida en que se le participaba que la voz pública decía que el cabecilla Borges había atravesado aquella provincia para dirigirse a la república de Andorra.

—Por conducto extraordinario se nos confirma hoy que Francia no insiste en la estradicción de Hodges, y que por lo tanto será puesto en libertad. La misma comunicación dice que el *Times* del día 7 ataca la apertura del istmo de Suez, creyendo que Francia apadrina el proyecto para destruir la influencia inglesa en Egipto.

Lemos en *El Estado*:

«La aparición del nuevo periódico *La Monarquía Española* ha causado en la prensa y en el público cierta sensación, no por las personas que ostensiblemente se hallan al frente de aquel, por mas dignas que sean, sino por la significación que se dá al nuevo diario, por el elevado origen que parece tener, y por la misión que se cree trae el estado de la prensa, por mas que la creamos aun un poco prematura, o, si se quiere completamente innecesaria aun. El misterio siempre interesa, y creemos le hay en la aparición de dicho diario.

El señor Losada, español, cubano de nacimiento, es ya conocido en Madrid, por haber estado hace tres años al frente de otro periódico titulado *El Norte Español*, cuya vida fue tan corta que deseamos no le imite en *La Monarquía Española*, como ofrece no tener puntos de contacto con aquel respecto a las doctrinas que sustente, por mas que el director de ambos haya sido y sea una misma persona.

La *Discusión* denuncia un hecho escandaloso que ha tenido lugar en Calaf (Cataluña) y del cual da cuenta en los siguientes términos:

«Un propietario de aquel pueblo fué a cumplir como buen católico con el precepto pascal: mas apenas se arrodilló a los pies del confesor, cuando este condesciende dijo que no podía admitirle en el tribunal de la penitencia, porque había redimido un censo que prestaba al clero. Los discípulos de *La Regeneración* a pesar de no ser liberales, progresan: hasta hoy se habían negado a dar la absolución a los desamortizadores, pero ahora ni oír quieren al penitente. Los absolutistas aprovechan a no dudarlo de las lecciones del tiempo: son mas realistas que el rey, y mas calóicos que el Papa. El Sumo Pontífice confirma las ventas hechas, pero no basta; falta el exequatur de los rege-necedores.»

Dice el mismo periódico:

«Anoche ha sido preso y conducido al Saladero donde se halla incomunicado en virtud de auto del juez que entiende en la causa formada por las proclamas cogidas en una casa de la calle de Jardines, el señor Pastor, jefe que fué de policía en tiempo del ministerio O'Donnell, y que hoy parece lo era dependiente del ministerio de la Gobernación.

Esperamos el resultado de esta causa que promete ser interesante.»

Las secciones del Congreso de diputados en su reunión de anteaño hicieron los siguientes nombramientos:

Presidentes.—1.ª sección, señor Bertran de Lis; 2.ª, señor Bravo Murillo; 3.ª, señor Barzanallana (D. Manuel), que venció al señor Mon; 4.ª, señor Gonzalez Brabo; 5.ª, señor Esteban Collantes; 6.ª, señor Lopez Ballesteros (D. Diego), y 7.ª, señor Cárdenas.

Vice-presidentes.—1.ª sección, señor Marfori; 2.ª, señor Hurtado; 3.ª, señor Fernandez Negrete; 4.ª, señor Nocedal (D. Cándido); 5.ª, señor Ramirez Arellano; 6.ª, señor marqués de Montecastro, y 7.ª, señor Maquieira.

Secretarios.—1.ª sección, señor Cardenal; 2.ª, señor Teresa; 3.ª, señor Vazquez; 4.ª, señor conde de Santa Ollalla; 5.ª, señor Rodriguez Vahamonde; 6.ª, señor conde de Pallares, y 7.ª, señor Belda.

Vice-secretarios.—1.ª sección, señor Armada; 2.ª, señor Anset; 3.ª, señor Canga Argüelles; 4.ª, señor marqués de Villaseca; 5.ª, señor María Barnuevo; 6.ª, señor Aguirre, y 7.ª, señor Barzanallana (D. José).

Para la comisión de peticiones.—1.ª sección, señor Sanchez Montalvo; 2.ª, señor Martí y Andreu; 3.ª, señor Araujo; 4.ª, señor Ozores; 5.ª, señor Garcia Miranda; 6.ª, señor Castillo, y 7.ª, señor Uria.

BOLSAS ESTRANJERAS.

Amsterd. 2 de abril.—Diferida, 25 5/8 p. Interior, 37 5/8 p.
Amsterd. 2 de abril.—Diferida, 25 15/16. Interior, 43 1/4.
Francia 2 de abril.—Diferida, 25 7/8. Interior, 37 1/4.
Londres 2 de abril.—Consolidados, 97 4/8. Interior, 44 1/8.
Diferida, 26 1/4. 3/8.
Certificados, 5 1/8.
Pasiva, 6 3/4.

Por toda la sección de sueltos:

F. M. Redondo.

PARTICULAR.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. la Reina nuestra señora (Q. D. G.) y su augusta real familia continúan sin novedad en su importante salud.

MINISTERIO DE FOMENTO.

REALES DECRETOS.

Siendo necesario plantear sucesivamente el servicio facultativo de los montes donde la importancia de ramo lo exija, conforme a lo prescrito en mi real decreto de 13 de noviembre de 1856; y contando en la actualidad con los medios de realizar tan útil mejora en alguna de las provincias mas principales, vengo en decretar la creación de cuatro distritos forestales en las de Huesca, Guadalajara, Cáceres y Cádiz, que serán por su orden el octavo, noveno, décimo y undécimo distrito.

Dado en Palacio a siete de abril de mil ochocientos cincuenta y ocho.—Está rubricado de la real mano.—El ministro de Fomento, Joaquín Ignacio Menos.

Para atender al servicio facultativo de montes, vengo en decretar el aumento del cuerpo de ingenieros del ramo con cinco plazas de la clase de segundos, cuyos sueldos se hallan incluidos en los presupuestos vigentes.

Dado en Palacio a siete de abril de mil ochocientos cincuenta y ocho.—Está rubricado de la real mano.—El ministro de Fomento, Joaquín Ignacio Menos.

ESPOSICIÓN A S. M.

Señora: El fomento de los montes no redundaba solo en beneficio de sus propietarios sino del país en general. Por eso el gobierno debe facilitar a los propietarios que los poseen los medios de mejorarlos; y como uno de los mas eficaces es la aplicación de los principios científicos a su cultivo y aprovechamiento, nada mas conveniente que proporcionarles ingenieros del cuerpo que, encargándose de la dirección fructífera de dichos montes, los pubien y desarrollen, procurando en sus rendimientos un nuevo germen de prosperidad pública.

Teniendo presente estas consideraciones, se dictó la disposición contenida en el art. 8.º del real decreto de 17 de marzo de 1854, en que se autoriza la concesión de licencias a los ingenieros para servir en otros ramos de la administración o fomentar los montes de propiedad particular.

Tan acertada resolución no puede menos de producir satisfactorios resultados adoptando las medidas necesarias para que, al mismo tiempo que quedan cumplidas las benéficas miras con que V. M. la acordó, se evite la concesión de licencias inmotivadas a los ingenieros, se fijen los derechos y obligaciones de los que las obtengan, y no se desatienda el servicio de los bosques del Estado.

Tal es el objeto del ministro que suscribe, al proponer a V. M. se digné conceder su aprobación al adjunto proyecto de decreto.

Madrid 7 de abril de 1858.—Señora.—A los reales pies de V. M.—El conde de Guendulain.

REAL DECRETO.

Teniendo en consideración las razones expuestas por el ministro de Fomento, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Para permitir en lo sucesivo a los ingenieros del cuerpo de montes separarse temporalmente del servicio activo del ramo será necesario:

1.º Que hayan servido en él tres años.

2.º Que sea con el objeto de encargarse de la dirección facultativa de montes que por su importancia den suficiente ocupación a un ingeniero.

Art. 2.º Las instancias en solicitud de licencias deberán dirigirse a la dirección general de agricultura por los dueños de los montes que hayan de confiar a los ingenieros, quienes manifestarán su consentimiento, acompañando un informe en que se dé a conocer la situación, calidad y principales circunstancias de las expresadas propiedades. No habrá necesidad de presentar este informe cuando los ingenieros sean reclamados por las autoridades y jefes de cualquiera de los ramos de la administración pública o del real patrimonio.

Art. 3.º La dirección general de agricultura, oyendo a la junta facultativa del cuerpo, propondrá lo conveniente sobre la concesión de esta clase de licencias, que se expedirán de real orden.

Art. 4.º Los ingenieros que obtengan licencias deberán ocuparse indispensablemente en la dirección facultativa de los montes que se les confíen, y abe-

Art. 5.º Mientras que los ingenieros se hallen disfrutando las licencias, no se les abonará sueldo ni haber alguno, ni tiempo de servicio como individuos del cuerpo para la opción a derechos pasivos; pero la tendrán a los ascensos que les correspondan, y gozarán del carácter y de todos los demás derechos y prerrogativas que pertenecen a los ingenieros del cuerpo.

Art. 6.º El gobierno podrá, si lo conceptúa conveniente, declarar supernumerarios a los ingenieros que obtengan licencias.

Los ingenieros supernumerarios estarán sujetos a lo dispuesto en el art. 5.º; pero si permaneciesen en esta clase cinco años, se les dará de baja en el cuerpo. Conservarán, sin embargo, el derecho de ingresar en él de nuevo, volviendo al servicio activo en clase de supernumerarios y en el lugar que ocupaban cuando se les hubiere dado de baja.

Art. 7.º Los ingenieros que obtengan licencia o reclamación de un jefe de alguno de los ramos de la administración pública ó de mi real patrimonio, y sean declarados supernumerarios, permanecerán en esta clase sin darles de baja en el cuerpo, cualquiera que sea el tiempo que disfruten de licencia, hasta que vuelvan al servicio del mismo.

Art. 8.º Después de gozar una licencia no podrán los ingenieros volver a obtener otra en los cinco años siguientes.

Art. 9.º Si se creyese conveniente, se proveerán las plazas de los ingenieros que disfruten licencias y sean declarados supernumerarios.

Cuando vuelvan estos al servicio entrarán desde luego en el goce de los sueldos, y haberes que según su clase les pertenezcan, pero ingresando en el cuerpo como supernumerarios, aunque con derecho a obtener en la primera vacante que ocurra, la plaza efectiva que les corresponda, según el lugar que ocupen en la escala.

Art. 10.º Conservando el gobierno la facultad de disponer de todos los individuos del cuerpo, siempre que juzgue oportuno dar por terminada la licencia de un ingeniero, volverá este al servicio activo en los términos expresados en los artículos 5.º y 9.º, según el caso en que se encuentre.

Art. 11.º Los ingenieros que sirvan al Estado en Ultramar permanecerán en el cuerpo en clase de supernumerarios.

Art. 12.º Las disposiciones del presente decreto se entienden sin perjuicio de las generales sobre licencias temporales a los empleados públicos en los casos ordinarios, así como de las que rigen para servicios especiales de la administración.

Art. 13.º Los ingenieros del cuerpo que a consecuencia de lo dispuesto en el art. 8.º del real decreto de 17 de marzo de 1854 se hallen en la actualidad separados del servicio activo, manifestarán en el término de un mes, desde la publicación de este decreto, si desean continuar disfrutando de sus licencias, en la inteligencia de que habrán de sujetarse a las prescripciones del mismo.

Dado en Palacio a siete de abril de mil ochocientos cincuenta y ocho.—Está rubricado de la real mano.—El ministro de Fomento, Joaquín Ignacio Menos.

Obras públicas.—Construcciones civiles.

Ilmo. señor: S. M. la Reina (Q. D. G.) se ha dignado aprobar la relación definitiva formada por la junta de comercio de esta corte, que manifiesta el importe de las indemnizaciones señaladas a los industriales comprendidos en la reforma de la Puerta del Sol, y disponer que por el consejo de administración de las obras del referido sitio se proceda al pago respectivo de las cantidades que en la misma se señalan, según está prevenido en la real orden de 9 de enero de este año.

De real orden lo digo a V. I. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid 29 de marzo de 1858.—Guendulain.—Señor director general de obras públicas.

Subsecretaria.—Sección de gobierno.—Negociado 4.º

Las alteraciones realizadas últimamente en la redacción y confección de la *Gaceta* de Madrid con el objeto de apartar toda competencia entre esta y los demás periódicos que dan a luz empresas particulares, competencia que por punto general puede producir efectos perjudiciales, no solo han escusado el diario oficial la inserción de documentos políticos de suma trascendencia, y cuya publicación le corresponde por su naturaleza y por su objeto, sino que, reduciendo su tamaño al escaso número de las disposiciones del gobierno que son de imprescindible publicidad, se le ha privado de otros materiales notoriamente útiles a los intereses públicos y privados, haciéndole perder gran parte de su necesaria y natural importancia, é imposibilitándole al mismo tiempo de anticipar las noticias, ya extranjeras, ya nacionales, cuya publicación sea oportuna, cuando es tan conveniente que estas circulen por conducto autorizado, evitando así en muchas ocasiones que la credulidad pública se extravie por versiones inexactas.

En vista de lo expuesto, y deseando que la *Gaceta* de Madrid satisfaga cumplidamente todas las exigencias que su carácter oficial le impone por una parte, y que el público tiene derecho a solicitar por otra, la Reina (Q. D. G.) se ha dignado mandar que se publiquen nuevamente con las mismas dimensiones que tenía en fin del año próximo pasado, insertándose en ella los extractos de las sesiones de Cortes, los partes telegráficos y demás noticias oficiales y de verdadero interés, así de las provincias de España como del extranjero, cuyo servicio puede realizarse sin ningún aumento notable en el presupuesto de gastos de este establecimiento, pues la redacción de la *Gaceta* conserva íntegro el personal de que se hallaba dotada antes de realizarse las reformas antedichas.

De real orden lo digo a V. S. para su inteligencia é inmediato cumplimiento. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 6 de abril de 1858.—Díaz.—Sr. Director de la *Gaceta*.

MINISTERIO DE LA GUERRA.

Núm. 35.—Circular.

Excmo. señor: El señor ministro de la Guerra dice con esta fecha al capitán general de la isla de Cuba lo que sigue: «El consejo de guerra, de oficiales generales celebrado en la plaza de la Habana el 23 de mayo próximo pasado para ver y fallar la causa instruida contra el teniente del regimiento de milicias disciplinadas de caballería de la misma plaza D. Ricardo Güell y Jimenez, por haber abandonado su estandarte, pronunció la siguiente sentencia: «Le ha contenido y condena el consejo en rebeldía, por unanimidad de votos, al don Ricardo Güell a la privación de su empleo, sin perjuicio de ser oído en delegación cuando pidiere, ó fuese

habido. Y enterada la Reina (Q. D. G.), á quien habido cuenta de la causa, conforme con el dictamen del tribunal supremo de Guerra y Marina, se ha servido desaprobar la preinsentencia, disponiendo que al referido D. Ricardo Güell y Jimenez se le espida la licencia absoluta sin opción de ingresar de nuevo en arma ni instituto alguno del ejército.

De real orden, comunicada por dicho señor ministro, lo traslado á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid, 25 de marzo de 1853.—El subsecretario, Manuel Manso de Zúñiga.—Señor.....

MINISTERIO DE ESTADO.

Ultramar.

El gobernador capitán general de Puerto-Rico participa, con fecha 13 de marzo próximo pasado, que la tranquilidad pública continúa sin alteración en el territorio de su mando, y que el estado sanitario de la isla sigue siendo satisfactorio.

CORTES.

SENADO.

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. MARQUES DE VILUMA.

Extracto de la sesión celebrada el día 9 de abril de 1853.

Se abrió á las dos y veintidós minutos, y leída el acta de la anterior, fué aprobada.

Dióse cuenta de una comunicación en que el señor conde de Miraflores escusaba su falta de asistencia á las sesiones por hallarse enfermo.

Se recibieron con aprecio, y acordóse repartir á los señores senadores, 200 ejemplares de los presupuestos del corriente año, que remitió el señor ministro de Hacienda.

El Senado quedó enterado de que la comisión que ha de dar dictamen sobre el proyecto de ley del ferrocarril de Palencia á los puertos de la Corona y Vigo, había nombrado presidente al señor don Andrés García Camba, y secretario al señor don Pascual Fernández Daza, y de que la relativa al proyecto de ley fijando las bases para el arreglo del notariado, había nombrado respectivamente para los mismos cargos, á los señores don Antonio González y don Juan Martín Carramolino.

Dióse cuenta de dos comunicaciones, en que los señores don Joaquín José Casasa y don Francisco O'Farrieta se escusaban de pertenecer á la comisión sobre el proyecto de ley en que se fijan las bases para el arreglo del notariado, acordó el Senado que dichas comunicaciones pasasen á las secciones quinta y sexta, para el consiguiente nombramiento de otros dos señores en su reemplazo.

Pasó á la comisión de peticiones, una exposición de don Antonio H. rnandez y don Simón García de Olalla, en la cual solicitan que este cuerpo colegislador se sirva examinar el uso que el gobierno haya hecho de la autorización que se le concedió para formular la ley de instrucción pública.

Fue aprobado sin discusión el dictamen de la comisión de peticiones en que había, según el mérito en la sesión anterior, relativo á la exposición en que don Juan Salazar Miravalles, notario de rídon, solicitaba que este cuerpo colegislador se sirva de emitir, sin dejar lugar á dudas, lo que se establece en la base 10.ª del proyecto de autorización para el arreglo del notariado.

Dióse cuenta de una comunicación del señor presidente del Consejo de ministros, poniendo en conocimiento del Senado que S. M. la Reina ha determinado trasladarse en su augusto esposo y esceltos hijos a la real villa de Aranjuez, el día 10 del corriente á las cuatro de la tarde.

Igualmente se dió cuenta de otra comunicación del señor presidente del Consejo de ministros, participando al Senado que el gobierno de S. M. se presentaría en la sesión del día de hoy para contestar á la interpelección anunciada por el señor marqués de Molins.

Quedó sobre la mesa, para discutirse en la próxima sesión, el dictamen de la comisión, de calidades sobre las relativas al señor conde de Pannorotto.

El señor Fernández Baeza ocupó la tribuna y leyó un dictamen relativo al proyecto de ley sobre el ferrocarril de Palencia á la Corona y Vigo, y anunció que se imprimiría y repartiría, y que se señalaría día para su discusión.

Acto continuo ocupó también la tribuna el señor Olivan y leyó el dictamen sobre reforma de la ley de minas; anunciándose igualmente que dicho dictamen se imprimiría y repartiría, y que se señalaría día para su discusión.

Leída por segunda vez la proposición de los señores Tejada e Isla Fernández, relativa al *Extrato* y *Diario* de las sesiones del Senado, obtuvo la palabra para apoyarla, y dijo:

El señor TEJADA: Señores, el Senado va á ocuparse hoy de un asunto muy importante. Trátase en esta proposición del modo de publicar las sesiones del Senado, y esta indicación basta por sí sola para que el alto cuerpo conozca cuanto merece llamar su atención lo que va á resolver sobre ella.

Los que hemos firmado esta proposición, la consideramos bajo dos conceptos: es uno el estado actual, lo que pasa, lo que sucede con motivo de la publicación de las sesiones del Senado; y el otro el pensamiento que proponemos, sin más fin que el de que la publicación de sus sesiones tenga los altos caracteres que corresponden á una publicación tan importante.

El estado actual es complicado y se halla expuesto á graves inconvenientes, habiendo sido sancionado por los señores senadores, en sesiones públicas y secretas, y calificado con tal exactitud, con tan justa severidad, que todos han reconocido que este estado, sobre gravoso, sobre perjudicial, sobre expuesto á graves dudas y á inconvenientes, no es digno de ser considerado de gran importancia, no es sostenible en manera alguna; y de aquí el pensamiento á que se refiere la proposición.

Relativamente al grave negocio de la publicación de las sesiones del Senado, hay actualmente cuatro medios, y cuatro medios simultáneos; bastando enumerar esto para conocer que el estado actual no puede seguir: primero, el acta que se lee al principio de cada sesión, relativa á la sesión anterior; segundo, el extracto que se forma por la secretaría y por las dependencias del Senado encargadas de su redacción; tercero, el *Diario de las Sesiones*, mucho más largo; cuarto, los extractos que forman y publican los periódicos de la manera que estiman mas conveniente.

Tal es el estado actual; tales, señores, los cuatro medios á que me he referido, cada uno de los cuales es insuficiente para llenar los altos fines de la publicación de las sesiones del Senado, al paso que todos juntos forman una complicación costosa y de tan difícil operación, que puede dar margen, como antes he manifestado, á complicaciones gravísimas en días críticos.

Por lo que hace al acta, es tan sencilla como la que los señores senadores han oído hoy al abrirse la sesión; y el juicio de todos es que ese documento único que tiene carácter verdaderamente oficial, es tan insuficiente, que no se puede formar por él una idea exacta y cual corresponde de lo que pasa en las sesiones del Senado; siendo por otro lado un documento que no puede servir para dar publicidad á las sesiones fuera de aquí, porque el acta no se imprime. Veo, pues, el Senado como ese primer medio de publicación no solo es insuficiente en el sentido de no dar una idea exacta de las sesiones, sino que también lo es como documento interior del Senado, como documento que jamás llega á conocimiento del público.

Segundo medio: el *Extrato* que se forma por las dependencias del Senado: es *Extrato*, señores, no tiene carácter oficial; ofrece, sí, la garantía de estar formado por dependencias del Senado; pero esa garantía no es suficiente para asegurar que lo que se refiere en él es realmente lo que ha pasado. Además, el estado actual es de tal naturaleza, que las empresas de los periódicos que trasladan las sesiones para con-

ciamiento del público, no se han conformado ni se conforman con los *Extratos* que aquí se hacen.

Tercer medio: el *Diario de las sesiones*, documento el mas estenso que hay, pero que tampoco tiene carácter oficial, ni ofrece mas garantía que la de estar formado por dependencias del Senado. Ese es un documento que no circula, y que, como se ha dicho aquí, puede considerarse solamente como un libro para una biblioteca.

Queda el último medio, el *Extrato* que se forma por las empresas periodísticas: *Extrato* que cada cual es lampo según lo tiene por conveniente. Esta indicación basta para dar á conocer que al *Extrato* á que ahora me refiero no puede dársele fuerza alguna legal, porque para que la publicación de las sesiones sea una garantía, es necesario que la referencia de las sesiones sea completa y oficial, pues si se puede alterarse su texto, puede convertirse en arma de partido, y en arma poco noble.

No hay, señores, por lo tanto otro remedio en la situación actual, que obligar á todos á insertar el documento oficial que se les entregue por las dependencias del Senado, librando así á los mismos periódicos de la responsabilidad en que pueden incurrir al no insertar la imprenta. De aquí el motivo que nos ha impulsado á presentar esta proposición, para que el Senado escutiga los medios mas dignos de transmitir al público lo que pasa en su recinto, sin que sea nuestra ánimo que prevalezca nuestro pensamiento, sino pura y sencillamente que el Senado se sirva tomarlo en consideración.

Hoy tenemos ya una ventaja con la disposición que este mismo día he visto en la *Gaceta*, mandando insertar en ella los *Extratos* de las sesiones de los cuerpos colegisladores (pues para como de desgracia, ni aun en las columnas de la *Gaceta* se insertaba lo que traían de los altos negocios del Estado pasaba aquí); pero esto no basta. ¿Cuál es nuestro objeto? Nada mas sencillo: que en lugar de esos cuatro medios de publicación solo haya uno, y que este se halle revestido de tales formalidades que nadie dude de su verdad, formando sobre él la opinión pública, y obligándose á los periódicos á insertarlo literalmente sin facultad de alterarlo; así es como tendremos un documento único, oficial, auténtico y garantido.

No diría mas en apoyo de la proposición, si un señor senador no me hubiera hecho la siguiente pregunta: Es medio de publicidad que se propone, ¿es ó debe ser objeto de una ley; ó de una mera proposición? Esta pregunta es grave; pero á nuestro entender, no es objeto de ley el modo de dar autenticidad á la publicación de las sesiones del Senado. Hay que distinguir entre el modo de celebrar la sesión, y la publicación de lo que en ella pasa. Nuestras sesiones son públicas con arreglo á la Constitución; pero el modo de darles publicidad es de la exclusiva competencia del Senado, y este es señores, el único objeto de la proposición.

Tal es la respuesta que en público damos á la Cámara sobre una dificultad que al principio nos pareció también grave; pero después hemos visto que los antecedentes del Senado relativos al medio de publicación de sus sesiones vienen en apoyo de la proposición que hemos presentado.

No quiero sentarme sin hacer una indicación á la Cámara. Esta proposición no ha sido en manera alguna motivada por ningún hecho, que en lo mas mínimo desfavorezca á las dependencias del Senado. En el concepto de la mesa, en el de los individuos de la comisión de gobierno interior, en el de todos los señores senadores, en el mío, y en el del mismo señor conde de Velle, que en una sesión próxima hizo algunas indicaciones sobre los vicios del sistema actual, sin intención de aludir á persona alguna, las dependencias del Senado son dignas de elogio; pues todos venimos diariamente la actividad y celo con que se ocupan asiduamente en cumplir con su cometido.

El señor SANCHEZ: Digo que se lea la proposición presentada en la sesión secreta de 23 de diciembre de 1848; y que fué desechada.

El señor PRESIDENTE: Se lea.

El señor ministro de GRACIA Y JUSTICIA (Fernández de la Hoz): El gobierno ha creído necesario tomar parte en esta cuestión, para llamar la atención del Senado sobre la misma, y para evitar que se infrinja un artículo constitucional.

El art. 28 de la Constitución dispone antes, que los reglamentos de los cuerpos colegisladores se formasen por cada uno de ellos; pero últimamente se ha reformado ese artículo, estableciéndose que dichos reglamentos sean objeto de una ley.

La proposición de que se trata prescribe como se ha de formar el acta y dictándose en su artículo 3.º, que el *Extrato*, autorizado por uno de los señores secretarios, se leerá al Senado como acta de la sesión anterior, para su aprobación; es decir, que ese *Extrato*, tal como la proposición lo establece, será en lo sucesivo *el acta del Senado*. Pues bien: el art. 13 del reglamento de este mismo cuerpo, determina en parte el modo de formar las actas, diciendo que es incumbencia especial de los secretarios cuidar de la redacción de las mismas, autorizando las con su firma y rubricando sus minutos, y llevando por separado las de las sesiones secretas, añadiendo el art. 14: los secretarios no insertarán en las actas los motivos ó fundamentos de las opiniones, ni los nombres de los opinantes, ni los llamamientos al orden ni á la cuestión, ni los discursos pronunciados ó los documentos leídos; ni autorizarán copia ni *Extrato* alguno de sus actas, á no mediado acuerdo del Senado.

Por consiguiente, con lo que hoy se propone se va á hacer una reforma de los artículos 13 y 14 del reglamento del Senado; y esto no puede hacerse legalmente, con arreglo al art. 28 de la Constitución reformada, hoy vigente, sino en virtud de una ley. El gobierno, pues, ha creído deber hacer estas observaciones, para evitar que se falle á un precepto constitucional.

Dice el señor TEJADA que por esta proposición no se trata de atacar ni de cortar la publicidad de las sesiones, sino solo de arreglar la forma de esa publicidad; pero debe tenerse en cuenta, como he dicho, que se infringe ese artículo constitucional; y por lo tanto, el gobierno llama la atención del Senado para que no preste su apoyo á la proposición presentada.

Terminado el discurso del señor ministro de Gracia y Justicia, leyóse la proposición á que el señor Sánchez había aludido, y en la cual se pidió por el señor Alcalá Galiano la supresión del *Diario de las Sesiones*, publicándose en su lugar las actas razonadas.

A petición del señor Tejada leyóse también el real decreto de 19 de enero de 1853, por el cual se hizo obligatoria para los periódicos la inserción íntegra del *Extrato* oficial de las sesiones de los cuerpos colegisladores; después de rectificar dicho señor y ministro de Gracia y Justicia, dijo:

El señor ALCALA GALLIANO: Para votar. ¿Entienden los autores de la proposición que esta obliga como ley, sin serlo, á los que no son del Senado?

El señor TEJADA: No.

Sin mas debate, preguntóse si se tomaba en consideración la proposición de los señores Tejada e Isla Fernández; y habiéndose podido por suficiente número de señores que la votación fuese nominal, acordóse así el Senado, resultando no tomarse la proposición en consideración por 75 votos contra 6.

Interpelección del señor marqués de Molins.

El señor PRESIDENTE: El señor marqués de Molins tiene la palabra para contestar su interpelección.

El señor marqués de MOLINS: Señores, sé muy bien que el Senado no gusta de esos incidentes llamados dramáticos, y debo seguir en esto las lecciones que me tiene dadas. Además, cuando han trascendido dos años de desgracias y de silencio, se siente uno mas inclinado á la indulgencia que al combate.

El estado actual de Europa es tal, que debemos todos agruparnos al lado de las ideas conservadoras, donde quiera que temolen sus banderas, y sacrificar nuestras pequeñas pasiones de odios, recriminaciones y animosidades. Hoy mas que nunca debemos seguir el precepto de un orador romano, y tratar las cosas públicas sin odio y sin animosidad.

Llevado de estos principios, me veré apoyado á mas de un gobierno, siempre que me ofrezcan garantías para la conservación del orden público, y de los principios con los cuales la sociedad entera puede salvarse. Guiado por estas máximas he interpeleado al gobierno de S. M.; convencido de que una de las cosas que mas

solidez dan á los gobiernos es cumplir pronta y lealmente con lo que prometen.

Á tres puntos limité la interpelección que voy á esplanar: á rogar al gobierno de S. M. que presente, tan luego como le fuera posible, la ley de empleados públicos; que diese una solución satisfactoria á la cuestión de la introducción de cereales, y que impidiera que se levantara en la capital de la monarquía un monumento alguno conmemorativo, mientras no trajese la proposición de ley que ofreció.

La esperanza de que á cada cambio ministerial se subvertiera la administración del Estado, reina en nuestra sociedad; y si esto sigue, como decía en otro lugar un entendido publicista, un catástrofe es inminente.

Oigo decir que se está elaborando esa ley en el Consejo real; pero yo me permito suplicar al gobierno que proceda con arreglo al espíritu que en ella domina, mientras se discute y se aprueba. Poco importa que respetabilísimos republicanos acuerden lo mas conveniente, que los legisladores lo perfeccionen y que yo sancione la corona si entre tanto, si esos cambios que deben durar lo que un señor ministro dijese que tenía llegado un día en que se viese declarado cesante por uno de sus comitantes.

Desgracia que se quiera una ley de empleados, y desgracia que se quiera una ley de cereales, y desgracia que se quiera una ley de monumentos, sino á los últimos empleados, muchos de los cuales he conocido á quienes se ha separado hoy para volverlos á colocar dentro de una semana en la misma provincia de donde se les sacó, no puede, merced mi aprobación; porque no creo conveniente que se proceda de antemano contra el espíritu que ha de presidir á la formación de la ley. Esto es lo que no quisiera que fuese el gobierno. Esto, como se ve, no es mucho pretender.

Pues bien; menos pretenderé aun con respecto á la cuestión de cereales. En julio de 1852, me parece, la escasez de la cosecha hizo que el gobierno de entonces permitiera la libre introducción por nuestros puertos. No satisfaciendo la cosecha del año siguiente, se prorogó el plazo hasta 30 de junio del presente año.

El señor Andino, con motivo de una petición hecha al Senado, preguntó al gobierno acerca de este asunto, y el señor ministro del ramo dijo que pensaba y lo resolvería. Yo no le pido mas sino que manifieste su resolución, porque el estado actual tiene los males de la abundancia y de la escasez.

Pero no solo con la introducción de cereales y el sueldo de los empleados se gobierna bien; hay otros asuntos de orden mas alto. La erección de monumentos públicos á varones insignes, ha sido en todos tiempos uno de los medios mas eficaces de estimular á las grandes acciones.

En punto á recompensas nacionales, tenemos un estado legal, que es la ley de 3 de noviembre de 1837. Confíese dos artículos: 1.º La nación adopta á los héroes de los que sacrifican su vida por la patria; y en virtud de este artículo se fundó el colegio de huérfanos de Aranjuez. 2.º Se establecerá un panteón nacional, á donde serán trasladados con la posible pompa los restos mortales de todos los españoles ilustres que después de cincuenta años de la muerte sean considerados acreedores á esta honra por las Cortes del reino.

Hago notar el plazo de cincuenta años y la Sanción de las Cortes.

En este estado, algunos señores senadores, queriendo quizás que se agregara á esa ley una parte relativa á los monumentos conmemoratorios, hicieron una proposición, que fué retirada por sus autores á consecuencia de haber prometido el gobierno que se presentaría un proyecto de ley sobre la materia, pero como quiera que los días pasan y la ley ofrecida no viene, sin embargo de que su articulación ha de ser bien limitada, mi ánimo es preguntar al gobierno si está en el seno presentar semejante ley; y si mientras se presenta se halla resuelto á impedir que se levante en la capital de la monarquía monumento alguno conmemorativo á español ninguno, por ilustre que sea.

El señor presidente del CONSEJO DE MINISTROS (Isturiz): Dejando para mis dignos compañeros la contestación á las primeras partes de la interpelección del señor marqués de Molins, voy á dársele yo á la tercera. Pero para ello necesito ante todo una declaración categórica de cuál es el monumento á que se alude por su señoría.

El señor marqués de MOLINS: Al que se levanta en honor de don Juan Alvarez y Mendizábal en la plaza del Progreso. (Murmuros).

El Sr. PRESIDENTE: Orden.

El señor presidente del CONSEJO DE MINISTROS (Isturiz): Señores senadores, al levantarme á contestar á esta interpelección, confieso que me domina un sentimiento que me aflige al mismo tiempo, al ver que en este recinto, donde debían encontrarse las pasiones políticas calmadas, se levante una cuestión, dándole dimensiones tan elevadas cuanto son diminutas las suyas.

Me limitaré á dar noticia al Senado de lo que en este negocio ha ocurrido.

Una comisión que existe, llamada comisión de la estatua del señor Mendizábal, me pasó el siguiente oficio: (Su señoría lo leyó): contestación: (Su señoría la leyó). Antes de proceder á las consideraciones que motivaron este permiso, debo decir que lo hice por mi parte, sin consentimiento, ni comunicación, ni influencia alguna de relación con mis compañeros de consejo. Y lo hice porque creí que era una cosa de suyo sencilla y de otra manera, no hubiera faltado á los deberes y consideraciones de mis compañeros. No tienen pues, responsabilidad, si la hay es solo mía, y con ella cargo. (Muestras de aprobación).

Las razones que me movieron fueron las siguientes: había yo oído en el extranjero que cuando murió el señor Mendizábal, su entierro fué objeto de una ovación pública, y yo sé que el mismo señor interpeleante leyó una de las cintas de su féretro. Había también leído que existía una suscripción de personas independientes para levantar una estatua á D. Juan Alvarez y Mendizábal, y colocarla en un sitio mas ó menos público. Sabía que esa estatua se estaba fundiendo en París; que llegó á Madrid, donde fué visitada por algunos personajes para ver si se parecía ó no al difunto Mendizábal. No ignora que se habían levantado estatuas, sin necesidad de todos esos antecedentes, que ha citado el señor interpeleante; tenía noticia de una estatua erigida á Balms, y de otra que acaba de erigirse al obispo de Cádiz; y me pareció que estaba en el convencimiento de todo Madrid que había una estatua levantada en honor del señor Mendizábal, y que se iba á colocar en la plaza del Progreso.

Esto es lo que ha pasado en este asunto, á que tanta importancia se ha dado; y ya que se ha traído á discusión pública, al conocimiento del Senado, será cuestión del Consejo de ministros, quienes propondrán á S. M. lo que estimen conveniente.

El señor duque de SAN MIGUEL: Pido la palabra.

El señor PRESIDENTE: No puedo concedérsela á V. S. un señor secretario va á leer el art. 65 del reglamento.

Leído el referido artículo, declaró así: El señor interpeleante declaró así la palabra para hacer y esplanar la interpelección. Si se le contesta, podrá hablar segunda vez; con lo cual, y sin que puedan tomar parte en esta discusión otros señores, se dará por terminada la interpelección; como sucederá también cuando el presidente del Consejo ó el ministro interpeleado manifestasen que tienen inconveniente en contestar.

El señor PRESIDENTE: Esta es la disposición legal, y yo la variaré por ninguna consideración: tiene la palabra el interpeleante.

El señor marqués de MOLINS: Viendo que el señor presidente del Consejo ha principiado obligándome á pronunciar un nombre que no quería pronunciar, por que para mí se trata de una cuestión general, creo que podría decir con Taito, que á esa persona no tuve ni odio ni afecto. Pero eso no era personal la cuestión, no me creía ver en la precisión de que parecieran mal en elogios que á su probidad, á su pobreza y á su conversión cristiana debía tributar. (Risas en las tribunas).

El Sr. PRESIDENTE: Orden, señores; atención.

El señor marqués de MOLINS: Los que se rien, sin duda, no saben bien que conversión, según el Diccionario, se llama la que hace todo pecador que se arrepiente en el lecho de su muerte, y recibe á su Dios contrito y humillado, como lo hizo don Juan Alvarez Mendizábal.

La conducción al cementerio, del cadáver de aquel insignie ministro, fué en efecto una apoteosis, la del hombre pobre y probo que necesitó del concurso de sus amigos y de las ofertas del ministerio para costear su entierro: apoteosis de que puede decirse lo que dijo el Manzoni hablando de Napoleón, y refiriéndose á su vida imortal y á sus triunfos.

El fin todos al lugar santo precedidos de la cruz, fué la prueba evidente de que aquellos mismos hombres que mas lejos han ido en ciertos senderos, gustan, á sentir el sueño de la muerte, reposar á la sombra de árbol de la cruz.

El señor presidente del Consejo ha olvidado, sin duda, que esta estatua ha sido considerada tan importante, que los Constituyentes hicieron una ley especial para ella. No es, pues, cuestión diminuta, sino de grave entidad, y así lo han considerado todos los países y en todos los tiempos. ¿Quién ignora que ha habido capitan en Grecia á quien no se recompensó mas que con erigirle una sola estatua?

Dice el señor presidente del Consejo que hay una estatua de Balms, y otra del obispo de Cádiz. Estas estatuas están en el cementerio, recordando á la vez la nada de la ceniza, lo grande de la esperanza verdadera: no están en las plazas.

En Cádiz, en Vich... ¿se quiere comparar un municipio cualquiera con la capital de la monarquía? Ninguna nación admite parangon semejante. Francia está llena de estatuas. ¿Cuántas hay en París? En la capital no se han levantado estatuas, sino en el cementerio. Foy, Casimiro Perrier, Lafitte, están en las calles. Allí se necesita la intervención de los poderes públicos para eso.

En Francia y Bélgica existe una ley por la que se previene que, cuando á consecuencia de revueltas se originan daños, si es en las plazas, es el municipio el que indemniza; si es en la capital, es el Estado; porque han considerado que la capital de Francia no es meramente el municipio de París, ni la de Bélgica es el de Bruselas. En España, ¿no está hoy suviendo el Estado á las obras de la Puerta del Sol, no por ser una plaza, sino un lugar público de la nación? Y cuando esto sucede, ¿la ciudad, al alijuntamiento tiene derecho para disponer de la colocación de monumentos en los sitios públicos?

¿Y en qué sitio? ¿Había oído, señores senadores, llamar siempre á esa plaza como hoy se llama? Se llama de otro modo; había un edificio: esa plaza se denominaba la plaza de Cosme de Médici, y llevaba el nombre del insigne fundador de la libertad y del gobierno de su país, lumbrera de la edad media, que desbraba con su nombre nuestra capital.

En ese solar tuvo su patria, su humilde celda, Tirso de Molina, el P. Gabriel Tellez, de la orden de la Merced. Hoy se traducen sus obras en lenguas extrañas, mientras aquí se levantan monumentos sobre las ruinas de su casa. En el convento de la Merced había á la vez un recuerdo de la persona representada y del representante, un retrato hecho por Zurbarán, que ignoraba dónde se halla; y ha desaparecido el recuerdo, ha desaparecido la celda, y ha desaparecido la memoria. Pero todavía había otra cosa en ese sitio: allí existía un monumento á la vez primer del arte, levantado por los millos de Hernán Cortés, que habían depositado sus cenizas y reclamado la oración y las lágrimas de la posteridad. No sé quién se ha aprovechado de sus miras, que se vendieron; solo sé que ya no existe ese monumento. En el mismo sitio, en nuestros días, estuvo la escuela del señor Goya; de modo que el sitio en que se juntaron los nombres de Cosme de Médici, de Tirso, de Hernán Cortés y de Goya, se llama hoy la plaza del Progreso.

El ayuntamiento, pues, no obró dentro de su derecho concediendo á esa plaza de las plazas de la capital, y aun al hacerlo estuvo desgraciado en la elección del sitio.

Voy ahora á decir algo acerca de lo que ha manifestado el señor presidente del Consejo al ocuparse de mi humilde persona. Me basta leer dos *Gacetas*. La de 7 de noviembre de 1853, en su parte no oficial, dice: «Segun estaba anunciado, se verificó el entierro de don Juan Alvarez y Mendizábal».

La de 9 de noviembre dice: «Habiendo regresado á esta corte el señor marqués de Molins, vengo en mandar que vuelva á encargarse del ministerio de Marina».

Vea el señor presidente del Consejo cómo el 6 de noviembre no podía acordarse de ese ilustre patriota, á no ser para encomendarle á Dios en la misa que estaba oyendo en Murcia á esa misma hora.

Me parece que he contestado categóricamente en cuanto dice relación á mi personalidad. Pero no se había introducido la moda que el presidente del Consejo de ministros nos ha mostrado hoy, de resolver por sí solo y sin la conformidad de sus demás compañeros. Esto le hace honor, pero no era moda. Aquel presidente no llevó la cinta, presidió el duelo con acuerdo de los demás ministros y con el mío, pues lo que hoy se lo digo: ¿qué digo yo lo doy? Yo hubiese estado en Madrid hubiese ido, y hubiera dicho entonces lo que un elegante republicano: «A pesar de que nos separa una eternidad de este hombre, estamos demasiado cerca de él para hacer otra cosa que llorarle: respetamos su memoria; y si es preciso hacerle en el mismo cementerio un sepulcro que la perpetúe, digamos, pero nada más».

Por lo demás, yo creo que por muchas razones, que no pueden ocultarse á la penetración del señor presidente del consejo de ministros, debe suspenderse la erección de ese monumento, que no es una obra de Madrid solamente, sino española, hasta tanto que, adoptadas las reglas convenientes, la legislación determine el modo y forma de llevar á cabo esa clase de obras.

El señor presidente del CONSEJO DE MINISTROS (Isturiz): Empleo por desdichar una equivocación involuntaria, y es la de que, si mal no recuerdo, he dicho que me parecía que el señor marqués de Molins llevaba una cinta del féretro. Si no es así, ruego al señor senador me dispensa esta equivocación.

En lo demás, su señoría ha querido por lo visto darme una lección, y yo no estoy en el caso de recibirla de su señoría ni de nadie: su señoría se ha detenido demasiado en una cuestión que yo no hubiera querido tratar, ocupándose en hablar de las ruinas, y de si sobre esas ruinas se ha concedido ó no el permiso para la erección de la estatua. Es innecesario que el señor senador recuerde que sin esas ruinas estaría yo en mi triste residencia del Tíames, y su señoría en el rincón de su pueblo.

El señor ministro de GRACIA Y JUSTICIA (Fernández de la Hoz): Tres son los puntos que abraza la interpelección del señor marqués de Molins, y á todos necesito dar cumplida contestación el gobierno de S. M.; pues aun cuando el señor presidente del Consejo de ministros ha querido relevar de la responsabilidad relativamente á uno de ellos, pudiera caber á los demás individuos del gabinete, estos no pueden menos de aceptarlo por completo, estando dispuestos á responder de todos los actos del gobierno, y á dar todas las explicaciones necesarias.

Entrando, pues, á ocuparme de la parte relativa á la erección de la estatua de que se trata, mi deber es manifestar que la legislación en esta materia, algunas á que aliente en una cuestión de policía, y nada más, cuando esos monumentos los costean los particulares, de suerte que, considerado así, y conforme la municipalidad de esta corte, compuesta de individuos muy dignos ciertamente, en la obra de que se trata, nada tiene de particular que el señor presidente del Consejo de ministros creyera oportuno asender á la petición que se hacía.

Clarto es que ha habido respecto á la erección de monumentos públicos el descuido de no dar una ley que fijas las reglas oportunas, sin duda porque hasta ahora no se ha creído necesario; pero el gobierno de S. M. había ya prometido presentar un proyecto de ley respecto del particular, y estaba ya á punto de hacerlo, cuando tuvo conocimiento de la interpelección, y creyó que lo primero que debía hacer era presentarse á contestarla, dispuesto como lo está á traer muy pronto el prometido proyecto de ley. Si por efecto de estas resoluciones es necesario suspender la continuación de esas obras hasta tanto que las Cortes decreten las reglas que han de observarse para la erección de monumentos, las obras se suspenderán.

Por lo demás, su señoría nos hará la justicia de reconocer que no hacemos inculpaciones á su señoría, como no se la ha hecho el señor presidente del Con-

sejo de ministros, cuando ha recordado lo que pasó al conducir el cadáver del señor Mendizábal.

Yo no concierne, no porque no tuviera aprecio particular á la persona de que se trata, pero no tuve intervención en nada; he visto, sin embargo, que la estatua se ha construído; lo se ha traído á Madrid, se ha puesto al público; que se han sucedido, en fin, una serie de actos desde muy antiguo, y que todos se han consentido. No es, pues, extraño que el señor presidente del Consejo tuviera todo eso presente y procediera como lo ha hecho.

Pero aparte de esta consideración, el gobierno actual no dejará de atender á la necesidad y conveniencia de que exista la debida armonía con la ley de 10 de noviembre de 1837, en que se determina que para la traslación de un panteón hayan de trascurrir 50 años. Pero todo esto será objeto del debate cuando el gobierno traiga su proyecto.

En cuanto á la ley de empleados públicos, sabido es ya que se está elaborando. Pero su señoría se lamenta de que á pesar de eso se hayan hecho variaciones inconvenientes. El señor ministro de la Gobernación dará las explicaciones convenientes, que justificarán las resoluciones del gobierno. Y respecto á la cuestión de cereales, también mi compañero, el señor ministro de Fomento, hará las observaciones oportunas; pues el propósito del gobierno es no rehuir esas explicaciones, sino por el contrario, dar cuenta cumplida de todos sus actos.

El señor ministro de la GOBERNACION (Díaz): Después de lo expuesto por el señor presidente del Consejo de ministros y el señor ministro de Gracia y Justicia, no debo ocuparme más que de la parte de la interpelección que se refiere á empleados públicos. El ministerio actual, en los tres meses de existencia que lleva, solo ha nombrado cuatro gobernadores civiles; las demás variaciones que se han hecho han sido por efecto de renuncias que el gobierno creyó deber aceptar. De modo que aun cuando á primera vista aparecen doce ó catorce nombramientos, no se han hecho en rigor mas que cuatro.

Respecto á empleados subalternos, se han hecho variaciones; pero qué variaciones han sido! Las que se han verificado se han debido no solamente al mejor servicio, y después de examinar las circunstancias de los funcionarios, sino á la necesidad de descargar el tesoro público. El gobierno, al obrar así, cree que ha estado dentro de sus atribuciones y de las ideas de justicia; pero según los principios de S. S., hasta que la ley de empleados se presente, no puede el gobierno hacer variaciones de ninguna clase, ni por confianza ó desconfianza, ni por conveniencia ni por economía.

En todos los departamentos en que está dividido el gobierno, no se han hecho nombramientos que puedan dar motivo á un cargo. Todos los destinos se han dado á los cesantes de 1854 y de otras épocas, que disfrutaban cesantía; de suerte que el tesoro público ha obtenido grandes economías, por mi parte puedo afirmar que deseo que cuanto antes se sancione por S. M. la ley de empleados. Es imposible gobernar en estas líneas. Pero hasta que se fijan esas reglas, hay una necesidad absoluta de examinar los antecedentes de los empleados; y en mi concepto no hay motivo para hacer por esto cargo al gobierno: si se quieren hacer, es menester que se concrete la cuestión. No creo necesario estenderme mas sobre el particular.

El señor ministro de FOMENTO (González): Muchos días ha que se ha interpeleado en ambas

